

Guatemala vive una nueva oleada de cooptación del Estado

La asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) comparte con la opinión pública su preocupación por la dinámica política que está, evidentemente, frenando o tratando de frustrar la ruta positiva que habían tomado algunas de las más emblemáticas instituciones estatales.

También expresa su indignación por la entrega de puestos de poder público a personas que representan los intereses de grupos de poder paralelo, cuyo fin es consolidar la cooptación del entorno presidencial y ejercer fuerte influencia en importantes estructuras de los partidos políticos, el Congreso de la República y el sistema de justicia.

Ejemplos de lo anterior son las negociaciones espurias que dominan el Congreso de la República y el nombramiento de altos funcionarios -uno de ellos el del ministro de Economía-, que no son más que rutas de escape para quienes pretenden eludir investigaciones criminales en curso.

La remoción del superintendente de administración tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, constituye un golpe que podría anular o debilitar la lucha contra la evasión fiscal; y envía un claro espaldarazo a quienes evaden impuestos, defraudan al fisco y operan violando las leyes del país, sin que haya sanción alguna.

Solórzano Foppa llegó a la SAT a imprimir vida institucional y a rescatar una entidad hundida en la corrupción; aunque su labor queda inconclusa, nos ha mostrado el valor de una gestión independiente, honorable y técnica, indispensable para fortalecer la recaudación y la moral tributaria.

FADS refuta los insustanciales argumentos del directorio de la SAT, la falta de voluntad, diligencia y eficiencia de los directivos, quienes optaron por un enfoque restrictivo de las normas que rigen la institución, eludiendo un necesario análisis integral.

FADS reitera su llamado a la ciudadanía para exigir avances en materia de fortalecimiento institucional, la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Alerta a la opinión pública sobre las alianzas políticas en el Congreso, así como de los nombramientos recientes y futuros, que podrían incluir cambios en las carteras de Gobernación y del Procurador de los Derechos Humanos; y en la política de persecución penal a cargo del Ministerio Público.

Estos movimientos son parte de una estrategia para fortalecer y posicionar de nuevo a los sectores que, desde dentro y fuera de las instituciones del Estado, están accionando para revertir los avances acumulados desde el 2015 en materia de lucha contra las redes de corrupción públicas y privadas.